

ATTAC ESPAÑA DURANTE EL AÑO DE PANDEMIA

En las fechas previas a la irrupción de la COVID-19, marzo de 2020, España contemplaba un nuevo ciclo político que pretendía superar desde una perspectiva progresista las consecuencias derivadas de la crisis anterior y que tenían secuelas en los ámbitos institucionales, políticos, sociales y económicos. En efecto, después de las elecciones de noviembre de 2019, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición Unidas Podemos (UP) firmaron un acuerdo de gobierno para la legislatura que estaba a punto de iniciarse. Posteriormente, en enero de 2020, se formalizó un gobierno de coalición entre ambos partidos.

Su programa de gobierno contemplaba dar un vuelco a las políticas neoliberales del derechista Partido Popular, que gobernó entre 2013-2019. Entre otras cuestiones: consolidar el crecimiento y la creación de empleo digno estable y de calidad, trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción, proteger y consolidar los bienes y servicios públicos, luchar contra el cambio climático, profundizar en nuevos derechos que dignifiquen a las personas e incrementar y profundizar las políticas feministas.

Para comprender la forma de implementar la nueva política puesta en marcha desde el comienzo de la pandemia, es necesario recordar que el marco institucional español central y territorial es complejo. España está constituida por 17 comunidades (regiones) y dos ciudades autónomas. Las competencias en materia de sanidad, educación, residencias de personas mayores y servicios sociales –entre otras– corresponden a dichas comunidades, que están gobernadas por partidos políticos de distinto signo. Las comunidades que han sido gobernadas por el Partido Popular (PP), como la Comunidad de Madrid, han realizado una labor de privatizaciones que ha dejado la sanidad pública o las residencias de personas mayores con muy pocos recursos, tanto de hospitales como de personal.

Por otro lado, es preciso recordar que la transición iniciada hace cuarenta años desde la dictadura hasta la actual democracia apenas tocó los aparatos policial, militar y judicial, de tal forma que gran parte de ellos siguen estando compuestos por personas con planteamientos de la derecha más extrema. Además, la Jefatura del Estado se encarnó en un rey que ha sido venerado como un héroe por la mayoría de la población debido a su supuesto papel al evitar un golpe militar en 1981, pero que recientemente ha tenido que huir de España porque en realidad ha demostrado ser un villano sobre el que pesa la acusación de eludir impuestos y de tener cuentas en paraísos fiscales.

La pandemia irrumpió a los pocos días de la toma de posesión del nuevo gobierno, cuando aún no nos habíamos repuesto de las graves consecuencias que trajo la crisis financiera de 2008 para la mayoría social: precariedad laboral, desempleo (especialmente entre la juventud), privatizaciones, desahucios..., y por otro lado, una ayuda económica de miles de millones de euros a los bancos. En este escenario llegó el coronavirus, obligando a decretar el estado de alarma y un periodo de confinamiento general que paralizó o redujo al mínimo la actividad económica, social y cultural del país durante más de 90 días.

Ante la grave situación creada, el gobierno de coalición adoptó medidas muy distintas a las que la derecha tomó en la anterior crisis. Se cambió el paradigma económico y social y se decretaron disposiciones, tanto para atajar el problema sanitario como para tejer una red de seguridad con el fin de sostener el tejido productivo, el empleo y proteger a las familias. En esta ocasión se intentaron mitigar las dificultades de la gente más débil económicamente y se aprobaron normas tales como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), el

Ingreso Mínimo Vital, una moratoria en las cuotas a la Seguridad Social, ayudas a las pequeñas y medianas empresas, prohibición de los desahucios, prohibición del corte en los suministros de energía y agua en los hogares, ayudas al alquiler, reglamentación contra la desigualdad de género, etc. Medidas que representan un avance social respecto a las que se adoptaron tras la crisis financiera, pero que se han mostrado muy limitadas ante la grave situación que la covid-19 ha creado y que aún persistirá durante algún tiempo. Por otro lado, ha habido algunos temas que se han manejado de una forma claramente criticable, como por ejemplo la fusión con criterios neoliberales de dos bancos, Bankia (con participación pública mayoritaria) y Caixa Bank (100% privado) o la gestión represora contra miles de personas obligadas a emigrar desde sus países africanos que buscan su salvación en Europa a través de la peligrosa ruta del Atlántico hacia las islas Canarias.

Otro factor importante en todo este tiempo ha sido la irrupción pública de la extrema derecha para tratar de aplastar a un gobierno que nunca ha reconocido y considera ilegítimo. Mentiras, bulos, desobediencia, acoso de sus medios de comunicación (muy poderosos), han sido la tónica general que hemos sufrido y seguimos sufriendo.

Mirando al futuro, hay mucho ruido sobre el papel que puedan jugar los fondos "Next Generation" procedentes de la Unión Europea, bien vía subvenciones o con créditos subsidiados. En concreto, para España hay previstos 140.000 millones de euros, equivalentes al 12,5 % del PIB español. Apoyándose en los citados fondos, el gobierno ha lanzado un "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" denominado "España Avanza", que pretende tener como ejes de acción la transición ecológica, la transición tecnológica, las políticas de género y las políticas sociales. Ciertamente tenemos muchas dudas sobre cómo se articulará operativamente dicho plan, en especial en el destino de dichos fondos.

Por nuestra parte, Attac, con las limitaciones propias de las restricciones por la pandemia, hemos realizado durante este tiempo diferentes actividades. El 14 de marzo de 2020 lanzamos un comunicado en el que destacábamos la importancia de lo público (sanidad, residencias de personas mayores, vivienda...) y proponíamos medidas de protección social, ayudas a las pequeñas y medianas empresas y una política estricta para acabar con la depredación de la naturaleza y del medioambiente. Junto a estas peticiones, reclamábamos una Renta Básica Universal, una política fiscal justa y progresiva, la eliminación de las guaridas (mal llamados paraísos) fiscales y un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) valiente y completo. Nos unimos a la campaña internacional contra las patentes de las vacunas y por una vacuna popular que no deje a nadie fuera. Posteriormente, organizamos debates y entrevistas en [Attac TV](#) que todavía seguimos realizando y que han tenido una excelente acogida, con mucha participación y miles de visualizaciones.